

INTERNO-EXTERNO. PINCELADAS SOBRE MÉXICO.

Beatriz Stolowicz¹

VII Conferencia de Estudios Estratégicos, Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI), La Habana, Cuba. 28 de octubre de 2022.

Es casi imposible comentar en pocos minutos la dimensión internacional de esta nueva realidad en México, porque *lo externo se dirime en lo interno*, que es muy complejo. Sólo haré mención indicativa de algunos aspectos, unas pinceladas, y quedarán fuera los muchos otros que deben ser contemplados.

Después de tan oscuros tiempos, es un hecho trascendente la vocación y compromiso latinoamericanista y caribeño de López Obrador y el proyecto de la Cuarta Transformación que encabeza, que recupera lo mejor de la tradición de la política exterior de México desde Lázaro Cárdenas, cumpliendo con el mandato del artículo 89 constitucional de “la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la resolución pacífica de las controversias”. Una postura de principios desde la cual denuncia reiteradamente que México ha sido un país invadido: por España con varios intentos de reconquista, dos veces por Francia y dos por Estados Unidos, con alto costo en vidas y el despojo de la mitad del territorio. Y al afirmar que México “no es colonia, ni patio trasero, ni protectorado”, principios que extiende a toda Nuestra América y en especial a Cuba y Bolivia, con importantes acciones fraternales y solidarias. Que como son de dominio público, a ellas no me voy a referir.

Lo externo se hizo estructuralmente interno en las últimas cuatro décadas con el mayor saqueo de la historia del país, de entrega al gran capital trasnacional, local y extranjero. Para ejecutarlo es que se hicieron los fraudes electorales que robaron la presidencia ganada por Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 y por López Obrador en 2006. No sólo se privatizaron mil empresas públicas desde Salinas de Gortari, sino que en 1992 se reformaron la Constitución y las leyes secundarias para legalizar la privatización de los bienes naturales comunes y la mercantilización de las tierras de propiedad social; es decir, la legalización del despojo territorial. También en 1992 se reformó la legislación laboral

¹ Profesora-investigadora del Área Problemas de América Latina, Departamento de Política y Cultura, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, México. Intervención en el Panel “América Latina y el Caribe ante un nuevo escenario regional: oportunidades y desafíos”.

para instituir la precarización del trabajo y la liquidación de derechos sociales. Ese fue el sustrato legal para el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá firmado en 1993. Con leyes subsecuentes hasta el 2013, se obligó al Estado a transferir inmensas cantidades de recursos públicos al gran capital local y extranjero: con la conversión a deuda pública de la fraudulenta deuda de las empresas privatizadas, llamados “rescates”; con la subrogación a privados de funciones públicas con financiamiento estatal; con contratos de latrocinio. A Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, a las que no se les quitó la titularidad jurídica pública, las desmantelaron para justificar la entrega de concesiones a transnacionales, de Estados Unidos, Canadá y España principalmente, a las que el Estado les subsidia sus ganancias. Contratos amparados en los tribunales internacionales de controversias en las que siempre pierde el Estado. Y que son protegidos de cualquier cambio de orientación política en los cometidos del Estado, con la creación de una miríada de organismos públicos autónomos, inmunes a las decisiones del Poder Legislativo y del Ejecutivo, integrados por miembros del gran capital de manera directa o con sus intelectuales. Todo este entramado de saqueo es tutelado por el Poder Judicial, transformado a modo. Esto se ejecuta en los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.

Este es el sustrato de la violencia. Por un lado, la represión a las luchas sindicales hasta llegar a debilitarlas y desarticularlas en los últimos años. Por otro lado, el despojo territorial para los negocios de megaminería con concesiones sobre el 60 por ciento del territorio, muchas a empresas canadienses; para la tóxica agropecuaria a gran escala de exportación; para el pulpo inmobiliario; con la desenfrenada extracción de agua. Destruyendo a comunidades y al mundo campesino, que en esas décadas aumentó la emigración a Estados Unidos. No sólo ha sido ejecutado con represión del Estado, sino también con el uso del paramilitarismo del llamado crimen organizado para forzar el desplazamiento, o para penetrar a las comunidades, dividir las y construir una base social de apoyo. Crimen organizado que no sólo está en los negocios del narcotráfico y del tráfico de migrantes, sino que participa en esos otros negocios y en asociación con lo público. Felipe Calderón, con la militar Iniciativa Mérida con Estados Unidos como soporte, emprendió una guerra para fortalecer a uno de los grupos criminales, que dejó un saldo de 200 mil muertos y decenas de miles de desaparecidos en su sexenio.

Pero también se construyeron mediaciones para el control social y político. Con un entramado de organizaciones intermedias, ONG, algunas de carácter religioso, financiadas con recursos públicos y empresariales, que se han usado asimismo para la integración de sectores de clase media. Y se desplegó una prolongada estrategia de adhesión o neutralización del mundo académico e intelectual con financiamientos focalizados.

Pueden deducirse los múltiples frentes de batalla en los que se tiene que enfrentar la furiosa oposición de la derecha política, intelectual y empresarial, interna y externa, y en el propio aparato del Estado.

Unas cifras ilustran la emergencia social que hereda el gobierno de la 4T: 70 por ciento de la población en condición de pobreza; el salario mínimo real perdió el 80 por ciento de su valor; 57 por ciento de la población económicamente activa está en el sector informal; 69 millones no acceden a salud ni a seguridad social. Se perdió la soberanía alimentaria, importando de Estados Unidos el 50 por ciento de los alimentos básicos. Un país desindustrializado convertido en maquilador, de empresas de Estados Unidos principalmente.

López Obrador triunfa duplicando su votación histórica, con 30 millones de votos, el 52 por ciento de los válidos. Se frustra el fraude electoral con la hazaña organizativa de Morena, que apenas 4 años antes obtuvo su registro como partido, y que todavía está en proceso de maduración. Para modificar el entramado legal, Morena tiene mayoría en ambas Cámaras para aprobar leyes, junto con el pequeño pero persistente Partido del Trabajo, pero no alcanza los $2/3$ para reformas constitucionales. En 2019, primer año de gobierno, usó intensamente esa mayoría; se restablecieron derechos laborales, entre ellos, la prohibición del *outsourcing* (tercerización); y con algunos votos de la derecha logró tres reformas constitucionales: la consagración de derechos sociales universales, la prohibición de condonación de impuestos a grandes empresas y la instauración de la revocación del mandato presidencial. En reacción, en 2020 la derecha se unifica en una alianza formal del PRI, el PAN y el PRD, con apoyos del partido Movimiento Ciudadano, para bloquear las iniciativas estratégicas del gobierno. En 2021, con candidatos comunes, la derecha obtiene algunos diputados federales más, y gana alcaldías en la Ciudad de México.

La principal arma política del presidente es la información cotidiana a la población. Con lujo de detalles, con cifras, nombres y apellidos, desenmascara a la derecha: sus

negociados mediante la corrupción, cómo vota en el Congreso, cómo mienten sus medios de desinformación y sus intelectuales; y hasta para burlarse de sus burlas contra el presidente. Y también para informar con detalle, junto con su gabinete ampliado, sobre las acciones del gobierno, en una permanente rendición de cuentas. Con un constante recorrido del país a ras de tierra. Es un notable ejercicio de pedagogía política que merece atención.

El presidente usa los momentos más críticos para avanzar en los objetivos, con un estratégico manejo del tiempo. En la crisis de la pandemia se aceleró la estrategia social guiada por el principio de que “por el bien de todos, primero los pobres”, cuyo eje es la recuperación de lo público “para el bienestar, para construir una democracia igualitaria y participativa, sin clasismo ni racismo”. Se despliegan los múltiples programas sociales con meta de universalidad y las acciones en el territorio, y se acelera la reconstrucción del sistema de salud pública, totalmente derruido. Es cuando, a golpe de información, el presidente exhibió a las grandes corporaciones que, aunque por las normas de gobiernos anteriores sólo debían pagar una tasa impositiva del 2 por ciento, deben impuestos por decenas de miles de millones de dólares; y explicando cuánto alcanzaría eso para financiar programas sociales. Después de exhibirlos, los invita a dialogar... y les van cobrando.

Hoy día, los múltiples programas sociales llegan a más del 70 por ciento de la población, urbana y rural. El salario mínimo real aumentó 63 por ciento hasta inicios de este año. Tres millones de trabajadores salen del *outsourcing* y acceden al Seguro Social. La reconstrucción de la salud pública se ejecuta enfrentando a monopolios; sólo en la venta fraudulenta de medicamentos el negocio de 6 empresas era de 5 mil millones de dólares al año, que se les acabó. La derecha hizo un gran escándalo contra el solidario apoyo de los médicos cubanos, que el presidente defiende con principios y hechos; los médicos llegaron a las zonas más apartadas, la población muy agradecida. Se apaga el griterío, aunque siguen insistiendo por otros medios.

La política social y de dignificación popular del gobierno impacta en la relación con Estados Unidos a través de los 38 millones de mexicanos migrantes, que aprecian lo que se hace por sus familiares aquí, a lo que contribuyen con cantidades crecientes de remesas, que superan los 45 mil millones de dólares en 2021. López Obrador desde hace tiempo ha tenido relación con ellos. Pero como presidente es el primero que los dignifica con un enorme y permanente reconocimiento público, aboga por su regularización legal, desarrolla

programas para atenderlos allí y acá. Ese fue el peso simbólico y político de su discurso en la Casa Blanca ante Trump, en julio de 2020, después de fuertes controversias en torno al muro y sanciones económicas, sobre las cuales posteriormente también informó con detalles. Este 15 de septiembre, los Tigres del Norte fueron los invitados a dar el concierto en la celebración de la Independencia en el Zócalo de la Ciudad de México, con su célebre canción que dice: “yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó”. Cada vez que la derecha de Estados Unidos ataca las políticas de México, el presidente responde que dará toda la información para que nuestros paisanos no voten por quienes irrespetan a los mexicanos.

La recuperación de la soberanía energética y de las dos empresas públicas es un eje principal desplegado desde el comienzo, que agita el conflicto con los gobiernos de Estados Unidos y España. Siendo presidente electo, López Obrador hizo que se aceptaran representantes propios en la negociación del T-MEC firmado por Peña Nieto. Públicamente relató los fuertes conflictos que hubo, hasta lograr que en el Capítulo 8 del Tratado se reconociera la soberanía de México sobre sus energéticos. Llegado al gobierno promovió una reforma constitucional que la derecha bloqueó, y tras denunciarla por defender a empresas extranjeras, como “plan B” envió una iniciativa de ley que Morena y aliados aprobaron, con la que cancela permisos. Aprovechó el momento para nacionalizar el litio, e informa de la elaboración de un proyecto conjunto con Bolivia para su industrialización. Antes había decretado la prohibición del *fracking*. Las empresas reaccionan con cientos de amparos judiciales concedidos por jueces en 24 horas (contra todos los cambios), que el gobierno apela con constancia. Ante los reclamos del canciller español por Repsol e Iberdrola, el presidente las exhibió también esquilmando a los españoles, y bajó el tono del reclamo. Hace pocos días, sin dar explicaciones, Iberdrola se desistió de un amparo pese a más cancelaciones de permisos. Respecto a los reclamos del gobierno de Estados Unidos, mientras López Obrador agradece “el trato respetuoso” de Biden, al mismo tiempo denuncia “el modito” amenazante de sus funcionarios... y después los recibe en Palacio Nacional. Las amenazas de Estados Unidos y Canadá para ir a un panel de controversias, por ahora no se concreta. Anteriormente, mientras agradecía que Biden ofreciera “un trato en pie de igualdad”, reclamó formalmente al gobierno de Estados Unidos que esté financiando a organizaciones en México, lo que calificó de “injerencismo”. La apuesta de la derecha a que los conflictos escalaran, por ahora no se cumple. Y hoy, ante la crisis por

la guerra en Ucrania, la estabilidad de los precios de energéticos en México y su impacto positivo para la población, legitima esas batallas del gobierno.

Lo mismo ocurre con el objetivo de recuperar la autosuficiencia alimentaria, para lo cual se despliegan programas de apoyo a los pequeños productores. Por decreto, se prohibió el maíz transgénico y el glifosato. Los empresarios de agricultura industrial en México se oponen. Monsanto-Bayer se ampara judicialmente. Los exportadores de Estados Unidos reclaman un panel de controversia. Y ante la inflación actual en alimentos, el presidente se plantea romper el monopolio de los importadores aquí, con un plan temporal para abrir las importaciones desde América Latina. Ya han puesto el grito en el cielo, pero si da resultados en bajar precios, también estas batallas tendrán apoyo social.

En el tema de seguridad, el gobierno de México exige el respeto a su soberanía. Se canceló la Iniciativa Mérida. No se permite la libre presencia de agentes de Estados Unidos, sólo en caso de convenios específicos, que hasta ahora no se realizan. El gobierno presenta demandas judiciales en Estados Unidos contra las empresas de armas por el inmenso tráfico ilegal hacia México. El litigio está en curso, que México continuará hasta que sea necesario, alegando contra la extraterritorialidad de las leyes de Estados Unidos. Y amparados por “nuestra autoridad moral”, como dijo el canciller Marcelo Ebrard.

Otro aspecto interesante de lo interno-externo es el tema laboral. Cuando se negociaba el T-MEC, estalló un movimiento inédito de huelga de los trabajadores de maquilas en el norte del país, con apoyo de sindicatos de Estados Unidos. También con su respaldo, los negociadores de la 4T lograron que se aprobara una cláusula laboral, que contempla la libertad de organización. La reforma a la legislación de 2019 incluye nuevos mecanismos para garantizar la libertad de organización independiente. En un número creciente de maquiladoras automotrices, de metalúrgica y electrónica, donde trabajan tres millones, se crean sindicatos independientes, varios dirigidos por mujeres, que en conflictos conquistan la representación en el contrato colectivo. Paradójicamente, apelando en varios casos al Mecanismo Rápido del T-MEC. Es que Estados Unidos necesita el flujo de suministros. Y el desplazamiento de los sindicatos “charros” de la CTM le quitan base de sustentación al PRI.

En estos complejos escenarios de confrontación, con acrecentada legitimidad, el gobierno de López Obrador se ha fortalecido, y por ende puede tener más peso en lo

externo. Cobra plena significación lo que él decía desde hace 20 años: “La mejor política exterior es la política interior”. Aunque hay que tomar con pinzas las encuestas, hasta las que encarga la derecha atribuyen una aprobación al presidente de 60 por ciento, y encuestas internacionales semanales le asignan casi un 70 por ciento.

Pero los indicadores más certeros son que Morena sigue ganando elecciones en estados bastiones del PRI y del PAN, y que hoy la alianza de partidos de oposición está en crisis. En 2018 Morena ganó en 4 estados; hoy gobierna en 21 de los 32 estados (tres en la frontera norte de 3200 km.) y en otro más tiene un aliado. El próximo año se disputarán dos importantes gobernados por el PRI: el Estado de México y el fronterizo Coahuila. Si los perdiera, quedaría gobernando un solo estado (al que llegó con candidato común de la alianza) y estaríamos ante el ocaso del partido que gobernó 90 años en México. Si no se presentan eventos catastróficos, no es descartable que en 2024 Morena vuelva a ganar la presidencia. Tal como dice López Obrador, se “sentaron las bases de la transformación”, pero hay que profundizarla y mucho. Anunció que se retirará totalmente de la actividad pública. Morena tendrá que avanzar en su papel como partido-movimiento para fortalecer la organización desde abajo. Como se ve, hay mucho para analizar. Gracias.